Corrupción mortal en Honduras

En su última película, la directora Katia Lara repasa la red de intereses fraudulentos denunciada por la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016. Una de las cada vez más numerosas tragedias.

LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 / LAURA MORALES VEGA

A Berta Cáceres la mató la corrupción. Esta es la tesis que defiende el documental ***Berta Soy yo***, de la directora hondureña Katia Lara. El largometraje, que se proyecta hoy en el marco del festival FILMAR de Ginebra, analiza los vínculos de interés que permitieron en un primer momento la implantación de proyectos hidroeléctricos y mineros en territorios de pueblos indígenas, y que después desembocaron en el asesinato de esta activista mundialmente conocida.

Con al menos 23 activistas medioambientales asesinados en Honduras desde enero de 2021, hay muchas expectativas puestas en el gobierno de Xiomara Castro, miembro del partido de izquierdas Libertad y Refundación (LIBRE), que lleva menos de dos años en el poder. Según Katia Lara, el cambio de paradigma tras los dos mandatos del ex presidente Juan Orlando Hernández, actualmente procesado en Estados Unidos por narcotráfico, ha suscitado una oleada de esperanza. Le Courrier se reunió con ella.

¿De qué manera el asesinato de Berta Cáceres es particularmente significativo en el contexto de inseguridad para los activistas medioambientales en Honduras?

Katia Lara: Este caso ha adquirido una dimensión internacional. La propia Berta sabía que sería muy difícil para ella y sus compañeros del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) movilizar suficientes recursos y visibilidad si permanecían aislados en Honduras. Berta hizo de la creación de vínculos entre las luchas en América Latina, pero también en África, una cuestión de honor.

También ha sido la única en señalar directamente a los bancos e instituciones financieras responsables de dañar el medio ambiente e intimidar a las comunidades indígenas. Los nombró sin ambages: el banco FICOHSA (Banque Financière et Commercial du Honduras SA, nota del editor), la filial hondureña del banco BAC (Banque d'Amérique Centrale, nota del editor), la empresa DESA (Développements Energétiques SA, nota del editor), entre otros. Explicó la implicación de la poderosa familia Atala Zablah, que incluye todas estas entidades. Camilo Atala Farajah, Presidente de FICOHSA, es primo de Jacobo Nicolás Atala Zablah, Vicepresidente de DESA y Presidente de BAC Honduras. Varios otros miembros de la familia Atala Zablah forman parte de la Junta Directiva de DESA.

Hoy, David Castillo, director de la empresa DESA, ha sido condenado a más de veinte años de prisión por el asesinato de Berta Cáceres. ¿Se ha hecho justicia?

Katia Lara: No. David Castillo fue condenado como coautor intelectual del asesinato de Berta, pero en realidad era un testaferro del clan Atala Zablah. Ellos eran los que invertían financieramente, los que más tenían que perder si no se lograba concretar la represa prevista para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, denunciado por Berta. Jacobo Nicolás Atala Zablah fue citado como testigo en el juicio, pero eso fue todo. Se negó a declarar y guardó silencio ante el juez.

Muy recientemente, a principios de noviembre, fue elegido un nuevo Fiscal General en el país, Johel Zelaya. Es alguien que ya ha defendido a los pueblos indígenas y que no procede de las esferas tradicionales del poder. Ha iniciado procedimientos contra los políticos corruptos que rodeaban al ex presidente. Así que tenemos la esperanza de que pueda emprender acciones legales contra la familia Atala.

"El Gobierno ha socavado el todopoderoso negocio de ciertas multinacionales y éstas no están contentas" Katia Lara

¿Es optimista sobre la evolución de la situación, a pesar de los numerosos asesinatos que se han producido en los dos últimos años?

Katia Lara: Seamos sinceras, las condiciones en las zonas rurales donde viven los pueblos indígenas son malas. Los indígenas siguen siendo vulnerables y sigue habiendo desplazamientos forzosos. Pero en general, hemos notado que desde la elección de Xiomara Castro, el comportamiento de la policía hacia los movimientos sociales ha cambiado. Hay un poco menos de violencia. Esta evolución, por pequeña que sea, unida a la elección del nuevo fiscal, nos da esperanzas, aunque los procesos sean muy lentos.

¿Cómo valora el inicio del mandato de Xiomara Castro?

Katia Lara: He notado una voluntad real de regular legalmente el acceso y uso de la tierra y los territorios, que es un tema central en Honduras. Todos los problemas de desplazamiento forzoso y sobreexplotación de recursos se derivan de ello.

Está, por ejemplo, el caso del territorio Tierras del Padre. El anterior juez había admitido que era propiedad de un importante promotor inmobiliario, pero la nueva Corte Suprema de Justicia, elegida por el Congreso en febrero, anuló este veredicto en septiembre. La zona de Tierras del Padre fue devuelta y reconocida como perteneciente a la comunidad indígena que habita la región desde tiempos inmemoriales. Se trata de un acontecimiento totalmente histórico que sienta un precedente.

Son los proyectos mineros e hidroeléctricos los que amenazan estos territorios ancestrales. ¿Dónde están hoy?

Katia Lara: Desgraciadamente, aún hoy, el 33% del territorio hondureño está destinado a proyectos de este tipo. Es una cantidad enorme. El gobierno actual ha empezado a tomar cartas en el asunto, en particular derogando en 2022 la ley ZEDE (Zonas de empleo y desarrollo económico, nota del editor). Este régimen excepcional se introdujo para animar a las multinacionales extranjeras a establecerse en Honduras concediéndoles una autonomía casi total. La empresa beneficiaria se convertía en una especie de gobierno independiente que ejercía su autoridad sobre un territorio determinado. Podía aplicar sus propias leyes, en particular para frustrar movimientos de protesta.

Xiomara Castro revocó esta medida, pero las antiguas concesiones siguen vigentes. Varias empresas han emprendido acciones legales contra el gobierno hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, dependiente del Grupo del Banco Mundial). Reclaman varios cientos de millones de dólares por la anulación del régimen ZEDE. Para decirlo sin rodeos, el gobierno jodió el todopoderoso negocio de ciertas multinacionales, y éstas no están contentas. Queda por ver cómo se desarrollará el procedimiento de arbitraje.